

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

**Referencia:** 110013335 009 **2019** 00071 00  
**Demandante:** Danilo Laiton Rodríguez  
**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (**UGPP**)

---

**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

(Rechaza demanda)

**I. ANTECEDENTES**

**1.1.** En providencia del 12 de diciembre de 2018, el Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, decidió no avocar conocimiento de la demanda y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá – Sección Segunda (fls.49 a 51).

**1.2.** Una vez sometido a un nuevo reparto, el 21 de febrero de 2019 le correspondió a este Despacho judicial (fl.54).

**1.3.** La demanda tiene como objeto la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, que según el demandante, realizó un descuento por aportes a pensión de factores de salario no cotizados. Por consiguiente, como se trata de un tema de derecho laboral, le corresponde a este Despacho avocar conocimiento del presente asunto.

**1.4.** Ahora bien, corresponde examinar si la demanda cumple con los requisitos legales del artículo 161 y s.s. de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), para ello observó lo siguiente:

**1.4.1. La demanda**

**1.4.1.1. Pretensiones**

El señor **Danilo Laiton Rodríguez**, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso demanda ante la jurisdicción contenciosa, en orden a obtener la nulidad parcial de la Resolución RDP 045081 del 26 de noviembre de 2018, por la cual la **UGPP**, reliquidó la pensión de vejez *postmortem* en cumplimiento de una orden judicial.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene devolver la suma de \$10.024.322 correspondiente a la diferencia entre lo descontado por la entidad por conceptos de aportes a pensión de factores de salario no cotizado, cuya suma corresponde es a \$890.000. Así mismo, solicitó el pago de los intereses moratorios, indexación y finalmente el cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 187 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

#### **1.4.1.2. Hechos**

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

- Mediante sentencia de segunda instancia del 17 de mayo de 2018, proferida por la Sección Segunda de la Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en expediente con radicado 111001333500920150054501, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por este Despacho, en la que se declaró la nulidad parcial de la Resolución RDP 038570 del 22 de diciembre de 2014, que denegó la reliquidación de la pensión de sobreviviente y la nulidad de la Resolución RDP 008459 del 03 de marzo de 2015, que resolvió recurso de apelación. En consecuencia, «ordenó a la UGPP efectuar la reliquidación de la pensión de sobreviviente del demandante Danilo Laiton Rodríguez, equivalente al 75% con la inclusión de todos los factores salariales devengados por la señora Blanca Matilde Rojas, durante el último año de servicios, esto es, teniendo en cuenta como partidas computables la asignación básica, prima de antigüedad, bonificación de servicios prestados (ya incluidas), bonificación por alimentación, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios».

- En cumplimiento de la anterior decisión, la UGPP profirió la Resolución RDP 045081 del 26 de noviembre de 2018, acto administrativo que según el demandante, ordenó el descontar mesadas atrasadas por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados por el valor de \$10.914.322, suma que desmejoró el montó a reconocer.



## II. CONSIDERACIONES

### 2.1. Problema jurídico

El Despacho debe determinar si es susceptible de control jurisdiccional la Resolución RDP 045081 del 26 de noviembre de 2018 expedida por la UGPP, por la cual ordenó la reliquidación de la pensión vejez *postmortem* del demandante, en cumplimiento de una sentencia judicial.

### 2.2. Solución al caso

#### 2.2.1. De los actos administrativos susceptibles de control judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del CAPACA «son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o que hagan imposible continuar con la actuación», es decir, que son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. Sobre el particular, el Consejo de Estado señaló:

*«Son pasibles de control judicial ante esta jurisdicción aquellos actos administrativos que adquieren el carácter de definitivos, o los de trámite que no hagan posible continuar la actuación administrativa. Solamente los actos definitivos pueden ser demandados. Y por acto definitivo se entiende aquel que resuelve de fondo la cuestión planteada ante la Administración. En otras palabras, acto definitivo particular es el que comúnmente niega o concede el derecho reclamado ante la autoridad y que, por ende, crea, modifica o extingue una situación jurídica, con efectos vinculantes para el particular. El único acto de trámite demandable es el que declara desistida la petición en interés particular, según el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011»<sup>1</sup>*

Ahora bien, los actos de ejecución han sido definidos por esta jurisdicción como aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa o judicial, como quiera que son expedidos exclusivamente con el objeto de materializar los actos definitivos o el fallo judicial. No obstante, si la administración al expedir el respectivo acto de ejecución se aparta del alcance del fallo, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que «en el nuevo temperamento no puede predicarse que el acto sea de simple ejecución, pues nace un nuevo acto administrativo, y por lo mismo, controvertible judicialmente».<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 15 de mayo de 2014, Rad: 20001-23-33-000-2013-00005-01 (20295), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

<sup>2</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de febrero de 2012, Rad: 15001-23-31-000-1997-17648-01 (20689), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

De lo anterior, se tiene que procede el estudio de los actos de ejecución de sentencias de forma excepcional cuando la decisión de la administración va más allá de lo ordenado por el juez, y crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial.

En consecuencia, son objeto de control judicial los actos administrativos i) definitivos, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica determinada; ii) aquellos que sin ser definitivos hacen imposible continuar con la actuación; y, iii) los actos administrativos de ejecución cuando se cumpla con los requisitos señalados anteriormente.<sup>3</sup>

### **2.2.2. Caso concreto**

De los antecedentes fácticos previamente transcritos, se encuentra que la Resolución RDP 045081 del 26 de noviembre de 2018, acusada en este proceso, se limitó a dar cumplimiento a la orden impuesta por este Juzgado y confirmada parcialmente por la Sección Segunda del Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (vía acción de nulidad y restablecimiento del derecho) en reliquidar la pensión de vejez postmortem del demandante con los factores devengados en el año anterior pensional, aspecto que claramente tiene la connotación de un acto de ejecución no susceptible de ser demandado ante esta jurisdicción.

No obstante lo anterior, la ley y la jurisprudencia han permitido que excepcionalmente se ejerza control judicial sobre actos administrativos expedidos en cumplimiento de una sentencia, «pero proferida dentro de una acción de tutela ó en los casos en que aquellos actos que al dar cumplimiento a la orden judicial, hagan un pronunciamiento ajeno a lo ordenado y que por lo mismo den origen a una nueva controversia judicial», aspecto que no es el analizado en el caso concreto, como quiera que el acto administrativo acusado, dio cabal cumplimiento a la orden proferida por el juez administrativo, que ordenó en el numeral quinto los descuentos de los aportes al sistema de seguridad pensional, sobre los factores que no cotizó la titular de la pensión».

Por lo anterior, el fallo ejecutoriado, según lo dispuesto en el artículo 297 del CPACA, constituye título ejecutivo, el cual puede ser cumplido obligatoriamente en virtud de orden judicial, del mismo funcionario que lo expidió. Si, según los argumentos del demandante, no hubo cumplimiento por la accionada o fue defectuoso, se trata de incumplimiento de obligación de hacer (Código Civil)<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Aspecto que ha sido reiterado por el Consejo de Estado, Véase la sentencia proferida el 13 de octubre de 2016, Rad: 0273-14, C.P. William Hernández Gómez.

<sup>4</sup> Ver los artículos 1608 y 1613 del Código Civil.



Ahora bien, el juez que emitió la orden u obligación de hacer es quien debe saber si se cumplió a cabalidad o lo fue de manera imperfecta. Esa es una de las principales razones para el legislador disponer que **el proceso ejecutivo**, para el cumplimiento de decisiones judiciales, **se adelante en el mismo expediente del proceso ordinario**. Esa decisión proferida por el Juez, se encuentra ejecutoriada, al punto de que, según está indicado arriba, la demandada la *ejecutó*, tal vez parcialmente según el demandante.

Por consiguiente, es claro que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en principio no es procedente para ordenar el cumplimiento de la obligación de dar contenida en decisión judicial. Así mismo, tampoco el Despacho evidencia de las pruebas aportadas con la demanda, el pago de estas sumas de dinero, para así librar el mandamiento de pago.

De conformidad con las consideraciones que anteceden, al verificar que la Resolución RDP 045081 del 26 de noviembre de 2018, es un verdadero acto de ejecución no susceptible de control jurisdiccional, como quiera que se limita a cumplir con una orden judicial y se ajusta a los parámetros fijados en ella, pues en aras de salvaguardar la legalidad procesal y ante la imposibilidad de control judicial de la actuación objeto de demanda, es una causal de rechazo (numeral 3º, artículo 169 del CPACA).

En consecuencia, el Despacho procederá, en los términos de ley, a rechazar la demanda por **no ser un asunto susceptible de control judicial**.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.**,


#### RESUELVE

**PRIMERO: AVOCAR** conocimiento de la demanda.

**SEGUNDO: RECHAZAR** la demanda de plano por no ser asunto susceptible de control jurisdiccional.

**TERCERO: DEVUÉLVASE** al interesado el original y sus anexos, sin necesidad de desglose y una vez ejecutoriado este proveído y hechas las anotaciones de ley **ARCHÍVESE** el expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
**GUILLERMO POVEDA PERDOMO**  
Juez

Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Rechaza demanda)

**Radicado:** 110013335 009 **2019** 00071 00

**Demandante:** Danilo Laiton Rodríguez

**Demandado:** UGPP

---

**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

**NOTIFICACION POR ESTADO**

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

---

**Miryam Yanneth Martínez Cortes**  
Secretaria